

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, proceden dentro del proceso ordinario con radicado número 05266310500120140004701, promovido por **SAULO MOSQUERA PALACIOS** en contra de **CENTRO SUR S.A., FELIPE MOSQUERA ANDRADE, MIGUEL PALACIO MORENO, CÉSAR EMILIO CÓRDOBA PALACIOS** y **COLPENSIONES**, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado el día diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017).

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **185**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, se solicitó declarar que, entre el demandante como trabajador y los accionados como contratistas se celebró un contrato de trabajo verbal a término indefinido, desde el 26 de septiembre de 2011 hasta el 27 de octubre de 2011, que culminó de manera unilateral e injusta. Se ordene a los demandados al pago de las prestaciones sociales causadas, a la indemnización por despido injusto, la sanción moratoria del artículo 65 del C.T.S., sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, los aportes en Colpensiones, indemnización de perjuicios por la no dotación de vestido y calzado, auxilio de transporte e indexación.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó, que los señores Felipe Mosquera Andrade, Miguel Palacio Moreno y Cesar Emilio Córdoba fueron contratistas de la empresa Centro Sur S.A. para la realización de la obra SAUCES DEL SUR. Para el 26 de septiembre del año 2011, celebró el demandante con éstos un contrato de trabajo verbal a término indefinido y el 27 de octubre fue despedido. Narró que fue contratado como pilero siguiendo las órdenes de los demandados contratistas y de la empresa, utilizando las herramientas, implementos y demás. Expuso haber pactado una asignación salarial en suma de \$3.200.000 de manera quincenal y fue afiliado por el señor Miguel Palacio Moreno a Colpensiones.

Admitida la demanda una vez notificadas, las accionadas dieron respuesta así:

Centro Sur S.A. aceptó la existencia de las obras en construcción y la utilización de los contratistas en esa obra y en otras. Explicó que es extraño que tres contratistas tengan relación laboral con un mismo empleado, y que no le consta la existencia de los acuerdos que el actor aduce. Arguyó que el señor Juan Esteban Muñoz era administrador de la obra y no estaba facultado para dar órdenes. Sobre los demás hechos, explicó que no le constan, pues no era empleado de CENTRO SUR y, por tanto, se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones de *“mala fe”*, *“falta de legitimación en la causa por activa”*, *“inexistencia de la obligación”*.

Colpensiones, dio respuesta a la demanda, indicando que no le consta la relación laboral que se narró en la demanda y no se opone a las pretensiones por no estar encaminadas a condena alguna frente a la entidad. Sin embargo, interpuso las excepciones de *“Inexistencia de la obligación de Colpensiones de recibir aportes a la seguridad social retroactivamente”, “buena fe”, “imposibilidad de condena en costas”, “la genérica”*.

Los demandados **Miguel Palacio Moreno y César Emilio Córdoba Palacio** dieron respuesta a la demanda mediante curador *ad-litem* de acuerdo al artículo 29 del CPT y SS, quien narró no constarle los hechos descritos en la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones e interponiendo las excepciones de *“inexistencia de la obligación”, “cobro de lo no debido”*.

Mediante auto del treinta (30) de junio del año dos mil dieciséis (2016) se dio por no contestada la demanda respecto al demandado **Felipe Mosquera Andrade**.

En sentencia del diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, absolvió a los demandados de todas las pretensiones invocadas en su contra y condenó en costas a la parte actora.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte demandante, interpuso recurso de alzada indicando que, se centró la decisión de primera instancia en que se probó que los demandados eran contratistas de Centro Sur y esta última dueña de la obra Sauces Del Sur, pero que por las contradicciones del demandante en cuanto a quien fue su verdadero empleador no hay certeza jurídica. Sin embargo, argumenta que quedó probado en el proceso que el demandante era pilero en la obra Sauces del Sur, y que las tres personas naturales eran contratistas, con lo que simplemente debió condenarse a las pretensiones de la demanda de manera conjunta, ya que de no ser así sería premiarlos por la actitud omisiva. Así mismo, solicitó se valore la actitud procesal de la empresa demandada quien tenía en su poder las pruebas para despejar las dudas del Juzgado sin que así lo hubieren hecho pues no aportaron con la contestación de la demanda ningún pliego contractual de obra civil que deje ver

con quienes se contrató la obra de pileros. Solicitó que se hiciera pronunciamiento sobre la confesión ficta del señor Felipe Mosquera y se tenga en cuenta de la calidad académica de los testigos quienes al no ser abogados no están familiarizados con la terminología, lo cual, debió realizar el a quo y declarar que las personas naturales fueron los empleadores del trabajador. Respecto al salario, si bien se dice hubo una contradicción por las sumas dichas en la demanda y ante el Ministerio del Trabajo, considera dicha contradicción no existe, solo que se indicó en la demanda el valor mensual y ante el Ministerio la suma quincenal. Por todo ello solicitó la revocatoria de la sentencia.

ALEGATOS

Corrido el traslado para alegar, la parte accionada Centro Sur S.A. petitionó se confirme la sentencia, pues no se cumplió con la carga probatoria que al demandante le correspondía, al no poderse constatar la existencia de la relación laboral que se depreca. Explicó que si bien es cierto se probó la calidad de pilero del demandante en la obra Sauces del Sur, no se pudo establecer los roles de los demandados Cesar Emilio Córdoba, Felipe Mosquera Andrade y Miguel Palacios, si como empleadores, como intermediarios o como contratistas, por lo cual, hay inexistencia de las obligaciones que se reclaman como incumplidas.

Igualmente, aseveró que, ante la falta de prueba de la relación laboral, no hay mérito para el cobro de lo demás pretendido, consecuente al cobro de lo no debido. Expuso la mala fe del actor pues respecto el salario inicialmente adujo de \$3.200.000 con un pago quincenal, y en la diligencia ante el Ministerio del Trabajo argumentó \$800.000 semanales, y el testigo que arribó al proceso indicó la suma de \$4.700.000, valor exagerado e imposible en el marco de la labor desempeñada por el demandante. Indicó que el testimonio fue ambiguo por lo que no fue posible determinar la calidad contractual de los codemandados respecto al actor. Manifestó que la relación laboral fue inexistente con su prohiada y ello deja ver una falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no se puede establecer el vínculo que legitime la existencia de un vínculo. Finalmente, rogó que, en el caso de ser

revocada la sentencia, no sea condenado en costas por no existir razones de hecho y derecho, tampoco certeza ni material probatorio en contra de su representada.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar, en atención al recurso interpuesto, si se probó la existencia de la relación laboral solicitada en el líbello gestor, la terminación unilateral de la misma, con el fin de determinar la procedencia de las condenas impuestas.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es, así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo, y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga probatoria al demandado cuando éste se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado (sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

En voces de la Corte (CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779) se explicó así:

«De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que

se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado»

El contrato de trabajo, es un acuerdo celebrado entre dos partes, una de ellas denominada trabajador y otra empleador, donde el primero presta personalmente sus servicios orientado bajo la subordinación hacia el segundo, recibiendo una contraprestación denominada salario.

En aras de equilibrar la relación desigual entre las partes consecuente al poder subordinante del empleador, el legislador, consagró un mínimo de derechos y garantías, que propenden por el respeto a la dignidad del trabajador.

Para ello, en el Código Sustantivo de Trabajo, delimitó tres elementos para diferenciar el contrato de trabajo de otros que pudiera darse en el desarrollo de las relaciones humanas, así:

“ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

Igualmente, en el artículo 24 ibídem expuso lo siguiente:

“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”

Es así como mínimamente, el trabajador, en este caso el señor Saulo Mosquera Palacios, debe acreditar en el marco del proceso judicial, la prestación personal del servicio a favor de los accionados, la cual, definida en el artículo 5 del C.S.T., se trata de cualquier oficio, material o intelectual, desempeñado necesariamente por una persona natural. Siendo este punto el elemento diferenciador pues la prestación del servicio siempre debe ejecutarse por el trabajador de manera personalísima, sin que sea posible la sustitución de trabajadores; pues si se presenta lo contrario, será la prestación de un servicio, pero éste no será de naturaleza personal. Finalmente, dicha actividad debe beneficiar a un empleador.

A propósito de la subordinación, es el sometimiento del trabajador a la esfera organicista, rectora y disciplinaria del empleador, donde la obediencia es la premisa principal, siendo este elemento diferenciador de otro tipo de contrataciones, pues se caracteriza por ser irrenunciable e intransmisible.

La subordinación propia de las relaciones laborales es personal, el trabajador se somete a la persona del empleador, quien tiene la potestad para dar órdenes directas, implementar horarios y reglamentos internos, exigir permisos para ausentarse del lugar de trabajo, impartir sanciones disciplinarias ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, entre otras, a diferencia de los contratos de índole civil, comercial o administrativo, donde los contratantes se someten al cumplimiento de las obligaciones contraídas, y no a las personas.

Es importante recordar, que la doctrina ha reconocido ciertos indicios que pueden dar lugar a deducir la materialización de una relación laboral, tales como las condiciones locativas de la prestación del servicio, que generalmente serían dentro de la esfera del empleador; la existencia de un horario de trabajo; la ajenidad de los productos y los bienes producidos.

Finalmente, pero no menos importante, el servicio personal debe ser remunerado con una asignación que es pactada entre los contratantes y que tiene como fin retribuir la fuerza laboral impartida por el trabajador ante el empleador.

El beneficio probatorio que tiene el empleado como extremo vulnerable de la relación contractual, y que es por esta especialidad amparado, no releva de otra clase de cargas probatorias, es decir, no basta con acreditar sólo la prestación personal del servicio para que se derive inevitablemente la prosperidad de sus pretensiones, sino que, también recae en él la obligación de crear certeza sobre los extremos de la relación laboral que se endilga y respecto a quién.

No basta pues, que se pruebe la prestación personal de un servicio, para la declaración de la existencia de la relación laboral, sino, que no puede haber duda alguna, sobre a favor de quién se prestó el servicio para poder, con absoluta certeza impartir las consecuencias de la relación que se deprecia, lo cual, fue explicado en sentencia SL 672 de 2023, así:

“Así las cosas, luce patente que el juez de segundo grado no se equivocó al inferir, que pese a que la accionada certificó y admitió el nexo contractual laboral, y no se resistió a las pretensiones materia de debate, ello por sí solo no generaba certeza de que entre las partes hubiera existido un contrato de trabajo, pues en aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, no basta con que los contendientes acuerden que entre ellos hubo un nexo laboral, sino que es indispensable y vital que en el proceso quede acreditado a través de los diferentes medios de prueba, las condiciones, actividades, reglas y demás supuestos que permitan inferir sin dubitación que el trabajador destinó su fuerza al cumplimiento de las funciones impuestas por quien afirma era su empleador, y por las que devengó una remuneración.”

Corolario lo anterior, debe decirse, que en el escrito de demanda se indicó como fundamento fáctico, específicamente en el hecho Segundo, que al actor lo unió desde el 26 de septiembre de 2011, contrato verbal a término indefinido con los señores Cesar Emilio Córdoba Palacio, Miguel Palacio Moreno y Felipe Mosquera Andrade para prestar servicios a favor de la empresa Centro Sur. SA, y petición

en la demanda que, se declarara la celebración del contrato de trabajo con todos los demandados, impartiendo la obligación de pago de las acreencias contractuales.

Indicó el demandante que la relación laboral tuvo lugar entre el 26 de septiembre del año 2011 hasta el 27 de octubre del año 2011, por lo cual, la Sala procede al estudio de la prueba arribada:

Se aportó historia laboral del demandante en Colpensiones, en donde se presenta ausente las cotizaciones en el mes de septiembre- octubre del año 2011.

Se recepcionó el testimonio de:

Luis Carmelo Martínez Murillo: Expuso conocer al demandante por ser su compañero de trabajo, trabajaron en obras desde hace 18 o 20 años. Conoció a Cesar Emilio Córdoba Palacios, Felipe Mosquera Andrade y Miguel Palacio Moreno por haber sido sus compañeros de trabajo en muchas obras. Conoció la empresa porque los contrato a laborar por medio de Felipe y el señor Cesar. Indicó que la empresa Centro Sur le pidió el favor a Felipe y Cesar que los buscara para trabajar. Felipe Mosquera y Cesar Emilio Córdoba trabajan haciendo la misma labor que el demandante que era pilero, pero ellos eran unos intermediarios. Miguel Palacio Moreno era un encargado de buscar el personal por la empresa, porque a él se le pidió el favor de buscar el personal, pero se hacía lo que decía la empresa y el ingeniero. Se seguían órdenes del ingeniero y del maestro de obra de quienes no recuerda el nombre. La obra en la que laboró el demandante queda en la Tablaza, allá hacían unas pilas para unas torres. La labor fue desde el 26 de septiembre del año 2011 hasta el 26 de octubre de 2011. Al señor Saulo Mosquera lo contrató la empresa. Explicó que se pagaban las piedras y los metrajes, eso fue explicado por el ingeniero y el maestro de la empresa Centro Sur. Dejaron de trabajar porque llegaron y había orden de no entrara a laborar, no los dejó entrar el celador de la obra Centro Sur. Explicó que el demandante tenía que cumplir un horario que era impuesto por los ingenieros y el maestro. La empresa por medio del celador era el que verificaba los horarios de entrada y salida. Sabe que el demandante devengó

un salario de \$4.700.000 así: primera quincena \$2.300.000 y segunda \$2.400.000, dinero que no le fue cancelado. El demandante escavó 5 pilas marcadas y muy profundas. Cuando salió el demandante faltaba mucho aún por hacer. Felipe Mosquera y Cesar eran sólo encargados de buscar el personal, pues quien los contrató fue Centro Sur. Expuso que no recuerda el nombre del “maestro”, ni del “ingeniero”. El “maestro” hacía lo que el “ingeniero” le decía. Los demandados Cesar y Felipe eran compañeros de trabajo y laboraban igual que los pileros. El horario lo daba la empresa Centro Sur. Sabía que el demandante laboró la suma descrita, porque a la terminación de la relación laboral, los dejaron ingresar para hacer un corte de lo que habían realizado. Indicó que el precio de los pileros se pacta con el ingeniero o con el contratista, en este caso con Felipe, Cesar y el ingeniero de Centro Sur, de quien no recuerda el nombre. Las condiciones de la labor se pactaron con Felipe y Cesar. Finalmente, y de manera contraria a lo expuesto al inicio de su declaración, indicó que el ingeniero le daba las órdenes a Cesar y a Felipe y ellos eran quienes trasmitían las órdenes, con quien además fue el pacto de pago, pues Miguel no era parte de la empresa, solo hacía un favor para afiliarse al personal.

El interrogatorio de parte, como elemento probatorio, debe verificarse a luz del artículo 191 del CGP extrayéndose de él, aquellos dichos que sean adversos a los intereses del declarante, pues de no ser así, sería una ampliación de los fundamentos fácticos de la demanda, y no, un elemento de prueba. Se puede constatar respecto al señor Saulo Mosquera Palacios, los siguientes dichos de confesión:

Fue contratado por el señor Cesar y el señor Felipe, con unos pagos catorcenales. La relación laboral se pactó mediante un contrato escrito, los jefes eran el señor Felipe Mosquera Andrade y Cesar Emilio Córdoba. Lo suspendieron un miércoles que el encargado de la portería le dijo que no podía ingresar más. Después, un ingeniero cuyo nombre no recuerda le expuso que el servicio seguiría con otros contratistas. No sabe cuál era el ingeniero residente pues no lo conocía, solo trataba con el contratista con el que pactó las condiciones. Cuando no lo dejaron entrar a la obra le preguntó a Cesar Córdoba y Felipe Mosquera y contestaron que habría

otros contratistas encargados. Reiteró que sus jefes eran Felipe Mosquera y Cesar Córdoba.

Del interrogatorio de parte del representante legal de la pasiva no se resaltó confesión alguna.

Sin que repose otro elemento de prueba aportado, es importante por la Sala recordar que al juzgador le corresponde evaluar las pruebas en las que funda su decisión, sin que el simple hecho de su escogencia signifique error fáctico alguno, o ausencia de apreciación como lo indicó la procuradora de la parte actora en su recurso. El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral, concede la potestad de formar el convencimiento sobre los hechos debatidos teniendo en cuenta para ello, aquellos elementos de prueba que tenga una fuerza persuasiva o vinculante mayor que otro sin dejar de lado, la conducta de las partes durante el proceso.

En sentencia CSJ SL1474-2021, la Sala Laboral precisó:

“4. No sobra agregar, que como en innumerables veces lo ha dicho la Sala, los jueces de instancia, al encontrarse en presencia de varios elementos probatorios que conduzcan a conclusiones disímiles, tienen la facultad, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del CPTSS, de apreciar libremente los diferentes medios de convicción, en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, pudiendo escoger dentro de las probanzas allegadas al informativo, aquellas que mejor los persuadan, sin que esa circunstancia, por sí sola, tenga la virtualidad para constituir un evidente yerro fáctico capaz de derruir la decisión, tal y como se dijo en la sentencia SL18578-2016, reiterada en la CSJ SL4514-2017; por tales razones, el hecho de que el juzgador de alzada le haya dado mayor valor probatorio a determinadas probanzas y con base en ellas cimentar su fallo, tampoco conlleva al quiebre de la sentencia confutada, puesto que ello no se traduce en la ocurrencia de un dislate fáctico. “

En el caso que nos ocupa, siendo las confesiones de demandante, el testimonio del señor Luis Carmelo Martínez Murillo y la historia laboral del actor los únicos elementos aportados de cara a dirimir el litigio, debe resaltarse que la prueba testimonial no guarda coherencia con lo expresado por el mismo actor, presentando las siguientes diferencias:

- Mientras el demandante indica que fue contratado por Felipe Mosquera Andrade y Cesar Emilio Córdoba en el interrogatorio de parte, en la demanda expresó que ello se dio también con Miguel Palacio Moreno, contrario sensu el testigo expresó que fue contratado por Centro Sur.
- El actor indicó haber recibido siempre órdenes de Felipe Mosquera Andrade y Cesar Emilio Córdoba en el interrogatorio y el testigo con vehemencia resaltó que solo se recibían ordenes de la empresa Centro Sur SA y de sus ingenieros, y solo a final de su declaración expuso que también se recibían órdenes de Cesar Córdoba y Felipe Mosquera.
- La testimonial adujo que los señores Cesar Córdoba y Felipe Mosquera eran compañeros de trabajo también pileros y para el actor eran sus empleadores.

De lo único que no hay duda en el plenario, es el oficio que desempeñaba el demandante, pues sin certeza se puede colegir quién ejercía sobre él la fuerza subordinante propia de la relación laboral.

Bajo ese entendido, y si bien se probó la existencia de la prestación de un servicio, no cabe duda que el actor no cumplió con su carga procesal de crear el convencimiento al juzgador sobre quién le contrato para ello, motivo por el cual, la existencia de la relación laboral no podría declararse.

Ahora, expuso la procuradora de la parte actora, que el *a quo* no tuvo en cuenta, lo que implicó dar por no contestada la demanda al accionado Felipe Mosquera Andrade, por lo que es imperioso que la Sala aclare el alcance del parágrafo del artículo 31 del CPT Y SS el que indica:

“La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado.”

El indicio, como ficción jurídica no es absoluto, pues no libera a la parte demandante de cumplir las cargas propias del artículo 167 del CGP.

Así las cosas, considera la Sala que, le asistió razón al *a quo* en absolver a las accionadas de las pretensiones invocadas, por tanto, la sentencia habrá de confirmarse.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, ante la desventura de su recurso, en cuantía total de \$1.160.000, en favor de los demandados.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida en primera instancia de manera íntegra.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo la parte demandante, y a favor de los demandados, ante la desventura de su recurso, en cuantía total de \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **41ac1cfd6afccd0c974bc1e0260402d87e983c156826296563562112650c3c81**

Documento generado en 22/06/2023 03:24:30 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>